



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general
20 de febrero de 2004
Español
Original: inglés

Comité de Derechos Humanos

71º período de sesiones

Acta resumida de la 1901ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el martes 20 de marzo de 2001, a las 15,00 horas

Presidente: Bhagwati

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 40 del Pacto (*continuación*)

Tercer informe periódico de Venezuela (continuación)

Observaciones generales del Comité

La presente acta está sujeta a correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo y presentarse en forma de memorando. Además, deberán incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, *dentro del plazo de una semana a contar de la fecha del presente documento*, a la Jefa de la Sección de Edición de Documentos Oficiales, oficina DC2-750, 2 United Nations Plaza.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las públicas del Comité se publicarán en un solo documento de corrección, poco después de finalizar el período de sesiones.

01-29549 (S)



Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 40 del Pacto
(continuación)

Tercer informe periódico de Venezuela
(continuación) (CCPR/C/VEN/98/3*)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de Venezuela toma asiento para participar en el debate de la Mesa.

2. **El Presidente** invita a la delegación a que siga respondiendo a las demás preguntas formuladas por el Comité.

3. **El Sr. Avendaño** (Venezuela), refiriéndose a la viabilidad de llevar la teoría a la práctica, señala que, aunque entiende que los miembros deben contar con hechos concretos, Venezuela necesita tiempo para adoptar nuevas leyes o enmendar las actuales, ya que la nueva Constitución sólo lleva un año y dos meses en vigor. En cuanto a la pregunta sobre la diferencia de género en la edad para contraer matrimonio, indica que el Código Civil de Venezuela rige las cuestiones relacionadas con la familia y el matrimonio. Si bien en la Constitución de Venezuela se recogen las directrices internacionales, la Asamblea Nacional requerirá tiempo para enmendar los textos legislativos, incluido el Código Penal, a fin de establecer condiciones de igualdad. Análogamente, se están redactando textos legislativos sobre la reforma agraria para los pueblos indígenas.

4. Volviendo a las observaciones sobre el acceso a la justicia, la necesidad de mayor información sobre la aplicación de la Ley de igualdad de oportunidades para la mujer, y el concepto de indulto tácito, el orador indica que todos los ciudadanos venezolanos y los extranjeros tienen acceso pleno y sin trabas a los tribunales. El hecho de que el 80% de la población venezolana viva en extrema pobreza obstaculiza enormemente los programas de guarderías y otros servicios para las mujeres, así como la acción encaminada a promover la igualdad entre los sexos. En resumen, muchas mujeres, en particular las madres solteras, siguen padeciendo graves desigualdades. Por último, en lo tocante al concepto del indulto tácito aplicado a la homosexualidad, dice que los homosexuales no son objeto de discriminación ni se restringen sus derechos, pero que esos derechos no se han consagrado en ningún instrumento legislativo específico del derecho interno.

5. En cuanto al porcentaje de mujeres que ocupan cargos de dirección en el Gobierno, se han hecho progresos en esa esfera. Por ejemplo, el 50% de los 60 embajadores acreditados de Venezuela son mujeres, las mujeres ocupan el 50% de los cargos de dirección en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el 75% del personal del Ministerio son mujeres, lo cual es un caso de discriminación inversa.

6. **La Sra. López De Penso** (Venezuela) dice que hay que ajustar una gran cantidad de textos legislativos existentes a los principios consagrados en la nueva Constitución. Por ejemplo, el Ministerio Público está trabajando en un proyecto de reforma del Código Penal, ya que ese código es anticuado y no responde a las realidades sociales. Análogamente, aunque en 1982 se actualizaron las disposiciones del Código Civil con respecto a las propiedades, todavía queda mucho por hacer en la sección relativa a los derechos de la familia. El caso de la niña presuntamente secuestrada por guerrillas colombianas es un caso aislado, y tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo han asumido la responsabilidad por su bienestar físico y moral.

7. Con respecto a la educación de niños indocumentados, el 20 de septiembre de 1999 el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes dictó la resolución 185 relativa a la matrícula de esos niños, los que asisten efectivamente a la escuela. El Ministerio de Educación y otros órganos del poder ejecutivo se han hecho cargo de la situación, como lo acreditan informaciones recientemente difundidas por la televisión y la prensa nacional. Venezuela está atravesando una crisis en lo que respecta al aborto, que está prohibido por el Estado y proscrito por la iglesia católica. Se ha previsto la posibilidad de abortos terapéuticos en casos de violación, y las menores están representadas por abogados en esos casos.

8. Aunque no se dispone de estadísticas sobre la trata de mujeres trasladadas de Colombia a Venezuela de que se informa, ésta se limita a casos aislados que están sujetos a las disposiciones del derecho internacional, las convenciones y el derecho interno aplicable en las fronteras nacionales. En cuanto a la violencia contra la mujer y la familia, la oradora destaca que en 1998 se creó una Dependencia para la protección de los niños, los jóvenes y la familia en el Ministerio Público. Las leyes prevén dos opciones para atender a los casos de violencia: la mediación o el recurso a los tribunales. La ley se aplica por igual a hombres y mujeres y cabe

señalar que a veces las mujeres son responsables de la violencia en la familia.

9. En la nueva Constitución se ha consagrado la protección del derecho de culto, aunque las iglesias están obligadas a inscribirse en un registro estatal y describir sus objetivos. Es responsabilidad del Gobierno brindar protección contra los posibles efectos perjudiciales de las sectas. El proyecto de ley contra la violencia hacia la mujer prevé sanciones penales y civiles por acoso sexual a la mujer. Se han puesto en marcha programas de prevención, pero en realidad se tramitan pocas denuncias de acoso presentadas por mujeres, porque éstas suelen retirarlas posteriormente.

10. **El Sr. Saltrón** (Venezuela) remite a los miembros del Comité a la página 58 de las respuestas por escrito de Venezuela a la lista de cuestiones, en la que se reseñan diversos artículos de la Constitución que otorgan nuevos derechos y garantías a los pueblos indígenas. El párrafo 1 del artículo 281 de la Constitución estipula el establecimiento de una oficina especial de la Defensoría del Pueblo para los pueblos indígenas. El orador señala a la atención de los miembros algunos de los principales grupos indígenas (wayúu, pemón, yanomami) y dice que éstos participan en el proceso electoral. En la Asamblea Nacional hay tres representantes de los pueblos indígenas, todos electos sobre la base de las costumbres locales. La Defensoría del Pueblo interpuso un recurso de amparo en nombre del pueblo yanomami, al que se le había negado su derecho a votar en una elección. Por último, aunque en estos momentos no se dispone de estadísticas sobre las escuelas, en particular las que brindan educación bilingüe, en breve se presentará esa información junto con las demás estadísticas solicitadas por los miembros del Comité.

11. **El Sr. Avendaño** (Venezuela) dice que el significado de “pueblos indígenas” en la nueva Constitución es distinto del concepto descrito en el derecho internacional. En cuanto a las observaciones anteriores sobre la libertad de culto, añade que el Estado firmó un acuerdo con la iglesia católica en 1964, en el que se estableció un *modus vivendi* y que en el Ministerio de Justicia se creó una Dirección de Asuntos Religiosos. Venezuela tiene una larga tradición de plena libertad de culto y hay espacio suficiente para las iglesias tradicionales y los nuevos movimientos religiosos. La ley venezolana no contempla el concepto de objeción de conciencia. Para concluir, asegura a los miembros del Comité que sus observaciones serán transmitidas a los

más altos niveles de los organismos y ministerios gubernamentales competentes de Venezuela.

12. **La Sra. Medina Quiroga** dice que desea que conste en las actas que no se respondieron algunas de sus preguntas, que otras sólo recibieron respuestas generales, y que espera recibir respuestas concretas por escrito en fecha posterior.

13. **El Presidente** destaca los largos intervalos entre los informes de Venezuela. Si bien la nueva Constitución de Venezuela contiene disposiciones loables sobre derechos humanos, la buena gestión de los asuntos públicos y la justicia social, esas disposiciones sólo serán valiosas si se aplican. Al Comité le interesa la realidad cotidiana concreta que enfrentan los ciudadanos. Puesto que las respuestas por escrito presentadas por Venezuela no se han traducido a los idiomas oficiales del Comité, las respuestas orales de la delegación adquieren una importancia aún mayor. En vista de que las disposiciones del Pacto tienen prioridad sobre el derecho interno, Venezuela debe proporcionar una respuesta por escrito en el plazo de una semana en la que indique los casos en que esas disposiciones han sido aplicadas por los tribunales venezolanos.

14. Si bien el Comité acoge con agrado que Venezuela haya adoptado un considerable número de medidas encaminadas a reducir la discriminación por motivos de género, subsisten motivos de preocupación, como la escasa participación de las mujeres en la Asamblea Nacional. Se pregunta si el Gobierno tiene planes a ese respecto, y también señala a la atención de los miembros la discriminación en el derecho penal con respecto al adulterio, los delitos de honor y la prostitución. A juicio del Comité, deben establecerse mecanismos para eliminar la violencia contra la mujer. El Comité agradecería también que se le explicara por qué la edad para contraer matrimonio es distinta para hombres y mujeres.

15. Observando que el personal de atención de la salud de Venezuela está obligado por la ley a notificar los abortos, dice que al Comité le preocupa profundamente esa situación, ya que esa política ha conducido a elevadas tasas de mortalidad materna debido a la renuencia de las mujeres a buscar ayuda médica tras complicaciones relacionadas con un aborto. Por otra parte, le preocupa seriamente que algunas disposiciones de la nueva Constitución, que responsabilizan personalmente a los jueces por cualquier error de juicio, puedan tener efectos paralizantes sobre la independencia de la judicatura y

que a los jueces se les prohíba formar una asociación entre ellos.

16. Aunque le complace saber que se ha reducido a 24 horas el período de detención de ocho días antes de que las personas sean llevadas ante un tribunal, le inquieta que no exista ninguna autoridad policial independiente donde se puedan presentar las denuncias de abuso policial. Además, Venezuela tiene que encarar lo más pronto posible los problemas de violencia y muertes en las cárceles, así como las ejecuciones extrajudiciales. Por otra parte, es alentador observar que el Tribunal Supremo ha declarado inválida la Ley sobre Vagos y abolido las actuaciones ante los tribunales militares contra personas que participaron en el golpe de Estado de 1992. En cuanto a la responsabilidad de funcionarios públicos por violaciones de los derechos de los ciudadanos, se pregunta si esa disposición se ha incluido en la nueva Constitución. Mucho le ha complacido saber que la Defensoría del Pueblo está investigando las denuncias de torturas y violaciones de los derechos humanos y tomando medidas al respecto. Por último, expresa la esperanza de que el Gobierno de Venezuela tome en cuenta las observaciones e inquietudes del Comité.

17. **El Sr. Avendaño** (Venezuela) asegura al Comité que una vez que los miembros tengan oportunidad de leer la traducción de las amplias respuestas proporcionadas por la delegación, se disiparán muchas de sus dudas. Algunos puntos no incluidos en el informe se explicarán dentro de una semana, y las estadísticas pedidas se enviarán al Comité lo más pronto posible. Por otra parte, su Gobierno no tiene interés alguno en ocultar ninguna situación determinada que pueda presentarse en Venezuela.

18. *Se suspende la sesión a las 16.00 horas y se reanuda a las 16.20 horas.*

Observaciones generales del Comité

Proyecto de observación general sobre el artículo 4 del Pacto (CCPR/C/71/Rev.7)

19. **El Sr. Scheinin**, hablando en su carácter de Relator del proyecto de observación general relativo al artículo 4 del Pacto, presenta el proyecto que se ha preparado sobre la base del texto anterior en segunda lectura. Ha habido un importante cambio de enfoque. En lugar de preparar una adición a la observación general No. 5 sobre el artículo 4 centrándose en la cuestión

de los derechos cuya aplicación no puede suspenderse, el Comité estimó más apropiado reemplazarlo por una nueva que comprenda todas las cuestiones jurídicas pertinentes relativas al artículo 4. En términos generales, los párrafos 6 a 16 tratan de los derechos cuya aplicación no puede suspenderse. Los restantes párrafos abarcan otros aspectos relativos al artículo 4. Amnistía Internacional ha enviado una comunicación, y el orador no tiene objeciones que formular a la incorporación de algunas de las sugerencias contenidas en la misma en el proyecto de observación general, si el Comité diera su acuerdo.

20. En el párrafo 1 del proyecto se trata la suspensión de la aplicación de las obligaciones dimanantes del Pacto. La suspensión se considera una medida unilateral de un Estado parte, pero que está sujeta a muchas importantes salvaguardias previstas en el artículo 4 del Pacto. En el párrafo también se señala que el proyecto de observación general reemplazaría a la observación general No. 5.

21. **El Sr. Lallah** dice que el párrafo podría aprobarse.

22. **Sir Nigel Rodley** dice que el artículo 4 tiene esencialmente una función permisiva, pero con ciertas limitaciones, mientras que la redacción del párrafo 1 “cumplir sus obligaciones dimanantes del artículo 4” parece indicar que se trata de un artículo obligatorio, en lugar de permisivo. La principal función del artículo 4 es eximir a los Estados, en cierta medida, de determinadas obligaciones que podrían dimanar para ellos del Pacto, pero con limitaciones, que constituyen en sí mismas obligaciones. Por consiguiente, es necesario asociar los dos conceptos de libertad de acción y delimitaciones obligatorias.

23. **El Sr. Kretzmer** dice que la idea podría expresarse utilizando las palabras “ayudar a los Estados partes a cumplir los requisitos enunciados en el artículo 4”.

24. **Sir Nigel Rodley** dice que la propuesta del Sr. Kretzmer es perfectamente aceptable.

25. **El Sr. Scheinin** apoya la propuesta del Sr. Kretzmer.

26. **El Presidente** dice que entiende que el Comité desea aprobar el párrafo, tal como ha sido enmendado.

27. *Así queda acordado.*

28. **El Sr. Scheinin**, en su carácter de Relator del proyecto de observación general relativo al artículo 4 del Pacto, dice que el párrafo 2 del proyecto se refiere

a las condiciones aplicables para disponer cualquier suspensión en virtud del artículo 4. Se ha elaborado sobre la base de la práctica del Comité, según la cual existen dos condiciones fundamentales, a saber, que la situación sea de un carácter excepcional que ponga en peligro la vida de la nación, y que el Estado parte haya proclamado oficialmente el estado de excepción. En su comunicación, Amnistía Internacional indica la conveniencia de incluir una tercera condición, la notificación internacional de un estado de excepción como condición para la invocación del artículo 4. El resto del párrafo se refiere a las funciones del Comité en relación con los estados de excepción. Hay una adición al final del párrafo en la que se destaca la necesidad de proporcionar información suficiente en los informes presentados con arreglo al artículo 40, para que el Comité pueda cumplir su tarea.

29. **El Sr. Kretzmer** propone que la primera frase del párrafo 2 comience con las palabras “La invocación de la institución ...”, en lugar de “Una decisión de invocar la institución ...”, y que se modifique la segunda frase para que quede redactada del modo siguiente: “Antes de que un Estado pueda suspender sus obligaciones en virtud del artículo 4 del Pacto, es necesario que se reúnan dos condiciones fundamentales”.

30. **La Sra. Chanet** hace suyas las observaciones del Sr. Kretzmer. Con respecto a la frase final, propone que se modifique su redacción de manera que diga: “A fin de que el Comité pueda cumplir su tarea, los Estados partes en el Pacto deben ...”. Aunque comprende lo que propone Amnistía Internacional en su carta, no está segura de que ello está en armonía con el Pacto. El párrafo 3 del artículo 4 no dice que un estado de excepción esté sujeto a la confirmación del Secretario General.

31. **El Sr. Amor** propone que se añada a la frase final la palabra “exacta” de modo que diga “información suficiente y exacta”. En el párrafo de que se trata, la versión francesa del texto se refiere a un “état d’urgence”, mientras que la expresión correcta es “état d’exception” que tiene un significado más amplio y comprende la primera expresión.

32. **El Sr. Lallah**, a quien apoyan el Sr. Klein y el Sr. Henkin, dice que está de acuerdo con la propuesta del Sr. Kretzmer con respecto a la primera frase, pero recomienda que se reemplace la palabra “institución” por la palabra “ejercicio”. La expresión “régimen de facultades de excepción” utilizada en la última frase es demasiado críptica y debería ser reemplazada por las

palabras: “legislación especial que ponga en vigor las facultades de excepción”. Por último, se pregunta si el Relator tenía intención de indicar todas las leyes concretas cuya aplicación pueden suspender los Estados.

33. **El Sr. Yalden** propone que la primera frase comience con la expresión: “Cualquier medida que suspenda la aplicación de alguna disposición del Pacto...” y manifiesta su acuerdo con la propuesta de la Sra. Chanet relativa a la redacción de la última frase. Con respecto a la cuarta y a la quinta frase, propone que se reúnan insertando un punto y coma al final de la primera de ellas, y suprimiendo en la última las palabras “En relación con ese marco jurídico interno”.

34. **El Sr. Shearer** hace referencia al requisito de que se aprueben disposiciones internas, constitucionales o de otra naturaleza, que rijan la proclamación de un estado de excepción, y dice que en Australia no existe ninguna disposición constitucional o legal a ese respecto. Además, sugerir que los Estados aprueben tales disposiciones legales en previsión de una situación futura incierta, parece casi invitar a que ésta se produzca. Se pregunta si la frase es necesaria, ya que la realidad es que, en las situaciones de excepción, los países tienden simplemente a suspender la aplicación de sus constituciones.

35. **El Sr. Scheinin** dice que ha tomado nota de las enmiendas propuestas por el Sr. Yalden, el Sr. Kretzmer, la Sra. Chanet y el Sr. Amor. Con respecto a las observaciones del Sr. Shearer, estima que el texto actual no es lo bastante flexible, ya que se refiere al “marco constitucional y demás disposiciones internas”. El Comité debe recomendar que los Estados cuenten con algún tipo de legislación para prever posibles situaciones de excepción, a fin de asegurar que no se limiten a suspender la aplicación de sus constituciones. Por último, en el texto francés, comprende que es preferible reemplazar la expresión “état d’urgence” por “état d’exception”. No obstante, la redacción francesa del artículo 4 del Pacto se refiere a un “danger public exceptionnel”, y dado que el texto inglés emplea los términos del Pacto, lo mismo debe hacerse en los textos francés y español.

36. **El Sr. Lallah** dice que, aunque comprende la observación del Sr. Shearer, muchos Estados partes tienen disposiciones constitucionales sobre el estado de excepción. Comparte por ello la opinión del Sr. Scheinin de que el Comité podría encontrar alguna redacción aceptable y espera su sugerencia a ese respecto. Algunas de

las constituciones examinadas por el Comité incluyen limitaciones que estarían en armonía con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 4.

37. **La Sra. Medina Quiroga** propone que la cuarta frase diga “Para proclamar un estado de excepción, es necesario que existan disposiciones del marco constitucional u otras disposiciones internas que rijan tal proclamación y el ejercicio de las facultades de excepción”. Dado que el texto original del proyecto de observaciones generales se redactó en inglés, el Comité debe adoptar la decisión de no publicar nunca un texto importante, tal como una observación general, sin disponer primero de las traducciones francesa y española revisadas por miembros de habla francesa y de habla española del Comité.

38. **Sir Nigel Rodley** dice que está de acuerdo con las modificaciones que se han propuesto. No obstante, con respecto a la cuestión de las disposiciones previas, comparte algunas de las preocupaciones de fondo expresadas por el Sr. Shearer, pero por diferentes razones. Evidentemente, el Comité no desea que quienes aspiran a ejercer mayor poder puedan creer que está legitimando las actividades extraconstitucionales. No obstante, existe un problema práctico para algunos países de la *common law*. La cuestión se ha planteado ante la Corte Europea de Derechos Humanos con respecto a la suspensión de la aplicación de disposiciones, declarada por el Reino Unido, que no tiene constitución, con respecto a Irlanda del Norte. En el caso *Brannigan y McBride c. el Reino Unido*, se adujo en favor del solicitante, que había impugnado una suspensión, el argumento de que no existía una disposición de esa naturaleza en la legislación del Reino Unido ni ninguna manera formal de proclamar un estado de excepción.

39. En el referido asunto, la Corte Europea de Derechos Humanos aceptó que un anuncio hecho al Parlamento por el Secretario de Estado constituía una proclamación suficiente a los efectos de la Convención. Los términos del artículo 4 tienden a reflejar los sistemas legales y constitucionales de tradición romana más bien que los sistemas de la *common law* en los que no existe una constitución. No obstante, no desea debilitar el necesario refuerzo de la tradición jurídica romana positiva y estima que la redacción propuesta por la Sra. Medina Quiroga podría ser apropiada para prever el caso de los países en los que impera la *common law*.

40. **El Sr. Ando** dice que la legislación del Japón sobre los estados de excepción es también muy incompleta. A fin de estar en condiciones de vigilar mejor esas situaciones, el Comité debe establecer un requisito sobre las disposiciones del derecho interno, y la propuesta de la Sra. Medina Quiroga podría ser apropiada para ello.

41. **El Presidente** propone que la cuarta frase del párrafo 2 se refiera al artículo 4 y diga “A fin de cumplir con los requisitos del artículo 4, el Estado parte debe adoptar disposiciones constitucionales ...”.

42. **La Sra. Chanet** dice que el Pacto, que exige un acto oficial de proclamación del estado de excepción, no puede subordinarse a disposiciones constitucionales o legislativas. Es por tanto necesario suprimir en la cuarta frase la expresión “a fin de cumplir con el requisito de proclamación oficial”. Además, si el Comité desea ejercer un control antes de que se proclame un estado de excepción, necesita disponer de información sobre las disposiciones constitucionales o legislativas pertinentes.

43. **El Sr. Rivas Posada** dice que el Comité debe llegar primero a un acuerdo sobre el concepto fundamental que ha de aplicarse, y decidir después cómo redactarlo. La idea básica consiste en que los estados de excepción deben regirse por disposiciones constitucionales o equivalentes. El Comité no está tratando de establecer una obligación de adoptar legislación, que es lo que indica la redacción de la cuarta frase (“debe adoptar legislación”). El concepto fundamental es que, para declarar un estado de excepción, los Estados partes deben estar autorizados por las normas constitucionales que rigen ese estado de excepción.

44. **El Sr. Klein** dice que la historia ha demostrado que, a fin de salvaguardar el imperio del derecho, los Estados partes deben contar con disposiciones constitucionales relativas a los estados de excepción. No obstante, sería ir demasiado lejos decir que en los demás casos están incumpliendo el Pacto. El Comité debe simplemente recomendar a los Estados partes que adopten esas disposiciones.

45. **El Sr. Henkin** observa que siempre se ha sentido más bien orgulloso de la ausencia de una cláusula de esa naturaleza en la Constitución de los Estados Unidos y está de acuerdo en que introducir la cuestión del cumplimiento del Pacto plantea problemas. La esencia de la cuarta frase consiste simplemente en afirmar que los estados de excepción deben estar regidos por la ley.

46. **La Sra. Medina Quiroga** dice que el orden de la segunda y la tercera frase quizás podría invertirse a fin de poner de relieve el aspecto principal. El principio de legalidad y la necesidad de algún tipo de normas legales imperantes.

47. **El Sr. Amor** conviene en que debe hallarse una redacción satisfactoria para todos, en la que se declare concretamente que los estados de excepción requieren un orden jurídico temporal —constitucional o de otra naturaleza— que los rija.

48. **El Sr. Shearer** señala que, si el Comité insiste en una disposición constitucional, los países de la *common law* tendrían que celebrar costosos referendos constitucionales o detenerse a aprobar una ley de facultades de excepción. Propone que, para satisfacer a los países de la *common law*, en la cuarta frase, además de suprimirse la referencia al cumplimiento, el texto declare que los Estados partes deben “actuar dentro” del marco constitucional y demás disposiciones nacionales, en lugar de “aprobar” esas disposiciones. Los Estados tendrían en tal caso que notificar al Comité el contexto en el que han actuado, a fin de que éste pueda juzgar si lo ha hecho en realidad de conformidad con sus facultades.

49. **El Sr. Lallah** observa que el Pacto exige que las proclamaciones se hagan oficialmente de conformidad con cualquier disposición legal que las rija; así pues, el texto del Comité no debe excluir ninguna de las posibilidades distintas de las disposiciones constitucionales. La frase en que se destaca la legalidad y el imperio del derecho constituye la esencia del párrafo 2. El orador iría aún más allá en el sentido de la propuesta del Sr. Shearer, y reforzaría la última frase reemplazando las palabras “a fin de que el Comité pueda cumplir su tarea” por la expresión “para que el Comité esté en condiciones de cumplir su tarea de aplicación del artículo 4”.

50. **El Sr. Kretzmer** está de acuerdo con que el principal propósito de la observación general consiste en hacer saber a los Estados partes lo que el Comité necesita a fin de establecer si están cumpliendo el Pacto. Por tal razón, daría una nueva redacción a las frases cuarta, quinta y última, para que recen: “Incumbe al Comité vigilar las disposiciones constitucionales o las disposiciones jurídicas de otra naturaleza que rijan la proclamación del estado de excepción y el régimen de las facultades de excepción. Los Estados partes en el Pacto deben por tanto incluir en sus informes presentados con arreglo al artículo 40, información suficiente

acerca de sus disposiciones legales y sus prácticas, para que el Comité pueda cumplir su tarea”.

51. **Sir Nigel Rodley** dice que, en definitiva, lo que preocupa al Comité no es la institución del estado de excepción por sí misma, sino las medidas adoptadas por los Estados partes que constituyen una suspensión de la aplicación de sus obligaciones dimanantes del Pacto. Conviene en que la idea central es la de legalidad a través de todo el proceso de proclamación, notificación y suspensión. Añadiría al texto que todas las medidas que adopten los Estados partes han de ser compatibles con el imperio del derecho y las disposiciones constitucionales y legales del país de que se trate.

52. **El Sr. Scheinin**, hablando en su carácter de Relator, dice que puede aceptar la propuesta del Sr. Kretzmer relativa a la tarea del Comité, junto con las propuestas del Sr. Shearer y Sir Nigel. De tal manera, las frases cuarta y quinta quedarían redactadas del modo siguiente: “Al proclamar un estado de excepción cuyas consecuencias entrañen la suspensión de disposiciones del Pacto, los Estados partes deben actuar dentro del marco de su constitución y otras disposiciones de ley. Incumbe al Comité vigilar que las leyes pertinentes faciliten y garanticen el cumplimiento del artículo 4”.

53. **El Presidente** propone que el Sr. Scheinin vuelva a redactar el párrafo 2 en su conjunto y lo someta al examen de la reunión siguiente.

54. *Así queda acordado.*

Párrafo 3

55. **El Sr. Scheinin** destaca la importancia del párrafo 3 y dice que en él se introduce un nuevo criterio en cuanto a lo que constituye, en las palabras del artículo 4, una situación excepcional que pone en peligro la vida de la nación. El Pacto no se refiere a la situación clásica de guerra o conflicto armado, porque los redactores no han querido legitimar la guerra; no obstante, el corolario es que el artículo 4 no distingue entre distintos tipos de estado de excepción. El concepto de estado de excepción necesita por consiguiente hacerse más estricto. La esencia del párrafo es la estrecha relación entre los conflictos armados y la noción de estado de excepción en el marco del artículo 4. Como consecuencia de ello, se necesita una cuidadosa justificación para cualquier otro tipo de situación que conduzca a los Estados partes a invocar el artículo 4.

56. **El Sr. Kretzmer** observa que las dos primeras frases del párrafo 3 —que se refieren al carácter excepcional del estado de excepción— no están necesariamente vinculadas con la idea de cuándo puede proclamarse ese estado. Conviene en que la guerra es el ejemplo típico, pero no cabe inferir que cualquier estado de guerra o de conflicto armado justifique la proclamación de un estado de excepción, y ello debe declararse expresamente.

57. **El Sr. Henkin** manifiesta su acuerdo y dice que debe hacerse referencia a otras situaciones en que la vida de una nación está en peligro. La guerra no es el único ejemplo, y tampoco todas las guerras constituyen ejemplos.

58. **El Sr. Amor** señala que en el párrafo 3, una vez más, la versión francesa del texto debe adaptarse al lenguaje empleado en el Pacto al traducir las expresiones “public emergency” (“situación excepcional”) o “state of emergency” (“estado de excepción”). Le preocupa que la guerra y la situación excepcional se consideren casi sinónimos. Las posibilidades son muy diversas. No todas las guerras constituyen estados de excepción, no todos los estados de excepción están vinculados con la guerra y no todas las situaciones excepcionales amenazan la vida de la nación. En lo que debe hacerse hincapié es en realidad en la noción de amenaza, y se necesita una formulación mucho más rica para abarcar todos los tipos de situaciones de que se trata.

59. **El Presidente**, hablando a título personal, dice que la Constitución venezolana, por ejemplo, muestra las variedades de situaciones excepcionales comprendidas en el concepto.

60. **Sir Nigel Rodley** advierte que, si se enumeran demasiadas situaciones, podría considerarse que el Comité está invitando a proclamar estados de excepción, cuando lo que debe hacer es desalentar esa práctica. Por consiguiente, estima apropiado indicar el problema arquetípico que amenaza la vida de una nación —la guerra—, del cual todos los demás tipos de situaciones excepcionales —que el Comité puede o no desear enumerar— no difieren demasiado radicalmente. Los conflictos armados, teniendo presente la advertencia del Sr. Kretzmer, deben convertirse en la piedra de toque de lo que el Comité contempla, sin hacer de ellos la consideración exclusiva, como en el caso del Convenio de Ginebra. Ciertamente, la práctica de los Estados de proclamar estados de excepción no se limita a las situaciones de guerra. Podría en realidad ser útil añadir

que la amenaza a la vida de la nación es el criterio que legitima la proclamación y la suspensión. La jurisprudencia regional indica que incluso situaciones que no abarcan todo el territorio de un país pueden constituir esa amenaza. Cierta exploración de esos conceptos podría fijar el contexto, al mismo tiempo que el Comité se atiene a la idea principal.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.